EXPTE. N° 108.593 “PAQUEZ OSCAR C/ AMUTAN S/ DEFENSA AL CONSUMIDOR S/ RECURSO DE QUEJA S/ COMPETENCIA”

Mendoza, 06 de mayo de 2.013.-

Y VISTOS:

El llamado al acuerdo de fs. 39, y

CONSIDERANDO:

1. Antecedentes

Que el Dr. Carlos Horacio Castro como letrado apoderado del Banco del Sol S.A. cuestionó ante la Excma. Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza la Resolución N° 948/11 dictada por la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza por la cual se le imponía una multa de \$ 15.000 por violación de Art.4° de la Ley 24.240.

Previo dictamen del Señor Fiscal General, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se declaró incompetente y entendió que la materia discutida en autos era de competencia de la Justicia Provincial razón por la que ordena la remisión de los actua-dos a la Justicia Ordinaria.

2. Competencia de este Tribunal.

Que el acto administrativo cuestionado emana de un organismo provincial, la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor y si bien por el mismo se impone una sanción por violación de una ley nacional, la n° 24.240, la acción intentada resulta ser competencia de este Tribunal. En efecto:

a) La cuestión que subyace refiere a las facultades sancionatorias de un organismo provincial que actuó en ejercicio de funciones administrativas en defensa del derecho de los consumidores.

b) La decisión sobre la legitimidad de la actividad administrativa de la Dirección que se encuentra cuestionada debe resolverse por aplicación de las normas de derecho administrativo local.

c) La competencia federal está reservada para aquellas acciones donde se cuestionen actos emanados de autoridades públicas nacionales (art. 45 Ley 24.240).

d) La Dirección Provincial de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, es competente para aplicar una sanción en tanto la Provincia puede ejercer sus facultades en forma concurrente cuando se vulnere el derecho de los consumidores de conformidad con los arts. 41 y 42 Ley 24.240 (26.361).

Consecuentemente y dado que las cuestiones de naturaleza contencioso administrativa deben ser resueltas en instancia única por este Tribunal conforme lo establece el art. 143 inc. 5 de la Constitución Provincial, corresponde asumir nuestra competencia para entender en la cuestión planteada.

3. Improponibilidad de la demanda.

Que dada la naturaleza administrativa de la cuestión, la vía por la que debe canalizarse la misma es la acción procesal administrativa prevista en la Ley 3918, por lo que se califica a la presente como acción procesal administrativa.

Conforme la normativa referida se torna necesario verificar, a los fines de disponer su viabilidad formal, el cumplimiento de los recaudos pertinentes, entre los que reviste sustancial trascendencia el agotamiento de la vía.

De la detenida lectura del escrito presentado por los actores como de la documentación acompañada se advierte que no se ha intentado concluir con la vía administrativa pues directamente se trae a revisión la decisión adoptada por la Directora de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor sin transitar ni siquiera mínimamente la instancia administrativa previa que exige la Ley 3909.

Incumplida esta carga se impone hacer aplicación de la figura excepcional de la improponibilidad de la demanda (L.A.89-68; 163-145 ; 164-336; 210-5) ya que se advierte que la sustanciación de la misma se traduciría

en un dispendio jurisdiccional inútil ante la evidente falta de agotamiento previo, condición ineludible para acceder a esta instancia jurisdiccional, conforme lo dispuesto por el art.5 de la Ley 3918 (LA 259-46; 260-223).

Por las razones expuestas, esta Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia,

R E S U E L V E:

1°) Asumir la competencia en la presente causa.

2°) Calificar a la acción deducida como procesal administrativa en los términos de la Ley 3918.

3°) Declarar la improponibilidad de la demanda deducida por la firma BANCO DEL SOL S.A. a fs.18/20 vta.

4°) Omitir pronunciamiento respecto a las costas.

Regístrese. Notifíquese.